

## **LECCIONES DE PAZ ENTRE COLOMBIA Y FILIPINAS**

### **En procesos bloqueados lo primero es la protección de la población y el protagonismo no violento de la sociedad civil**

**Camilo González Posso, 30 de agosto de 2010**

En los meses de junio y julio de 2010 se realizó un interesante ejercicio de intercambio entre misiones de paz de Filipinas y Colombia. Una delegación de 10 personalidades filipinas vinculadas a diversos aspectos de la búsqueda de la paz en ese país visitó Colombia entre el 5 y el 13 de junio y luego la misión de paz de Colombia viajó a Filipinas a entrevistarse con los más significativos actores del conflicto y de los ensayos de paz en ese país.

En cada caso la delegación se integró desde la diversidad y en la de Colombia estuvieron Martha Ruíz (periodista), Mauricio García SJ - Director del CINEP-, Tatiana Montaña - Docente de la UJTD-, el General® Henry Medina, María Guinnes, dirigente afro y de organizaciones de mujeres, Patricia Buritica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Yamile Salinas Abdala – Consultora y asesora en INDEPAZ, Henry Caballero – exdirigente del MAQLame, Camilo González Posso, Presidente de INDEPAZ.

El intercambio realizado forma parte de un proyecto de apoyo a las iniciativas de paz promovido por Conciliation Resources de Londres y que en Colombia, en acuerdo con INDEPAZ, se viene desarrollando desde 2004 con eventos y publicaciones académicas de análisis comparado de procesos en diversos países y sobre temas relevantes para la búsqueda de la paz. El Gobierno de Noruega, que tiene un papel activo en la mediación y monitoreo de los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno de Filipinas, fue promotor de este dialogo multiactores colombo - filipinos.

Para preparar el intercambio en Colombia se propiciaron consultas sobre lo que se ha denominado la Vía Ciudadana para Construir la Paz y se publicaron ensayos de análisis comparados elaborados por Kristian Herbolzherimer, Coordinador del Proyecto de Aprendizaje Comparado Colombia-Filipinas, en Conciliation Resources. Estos ensayos publicados por INDEPAZ, hacen una presentación sintética de la situación en Filipinas y destacan diferencias y similitudes en los conflictos armados y en las rutas hacia su resolución. En lo relativo a Colombia se parte de la hipótesis de que la clave de la paz está en la sociedad civil que se organiza y moviliza, tanto social como políticamente, para ganar espacios de democracia, justicia y equidad en una perspectiva de construcción de paz en la cual posibles negociaciones entre la guerrilla y el gobierno no son el centro de la estrategia sino un capítulo subordinado a las dinámicas no violentas.

Los integrantes de las dos misiones identificaron temas específicos de interés en el amplio abanico de los conflictos y la búsqueda de soluciones políticas y de allí se desprendieron

agendas que significaron decenas de reuniones en cada país. Los miembros de la delegación colombiana a Filipinas sostuvieron 35 reuniones en Manila y en las provincias de Mindanao y Negros y recibieron testimonios, información documentada, evaluaciones y ensayos de interpretación en reuniones con más 400 personas de entidades y organizaciones activas en las agendas de paz y de la mayor responsabilidad. La agenda – coordinada por la red nacional Sulong CARHRIHL, Adelante con el pacto de derechos humanos y dih, por Balay Mindanao y por LL en Negros - incluyó representantes del gobierno, del alto mando de las fuerzas armadas, de la comunidad internacional, academia, ONGs, voceros de las guerrillas moras, comunidades de paz, comunidades afectadas por macroproyectos mineros y de agroindustria, asociaciones campesinas de influencia de la guerrilla maoista, comunidades religiosas, periodistas, entidades estatales de derechos humanos, de asuntos indígenas, instancias conjuntas guerrilla – gobierno de monitoreo, mediadores y negociadores de paz.

Las lecciones de un ejercicio de análisis comparado son leídas desde los prejuicios del observador y en mi caso desde la percepción en Colombia de un largo ciclo de violencias y conflictos armados que se han degradado por la reiteración de crímenes atroces contra la población civil y que continúan en un contexto en el cual el recurso a las armas carece de toda justificación, legitimidad o papel de resistencia o progresivo en las luchas de poder. Mirando el espejo de largos conflictos armados como los de Filipinas, asombra la capacidad destructiva y la alta intensidad de la violencia contra la población civil que se ha presentado en Colombia. En Filipinas, con su historia de resistencia a la ocupación extranjera y a las dictaduras durante casi todo el siglo XX, con la existencia de guerrillas de mayor influencia, han estado lejos de la atrocidad que caracteriza las formas de violencia armada en Colombia.

En este país los registros más serios hablan de 50.000 muertes por los conflictos armados en los últimos 40 años. Cuatro millones de desplazados forzados por acciones de la guerrilla, los paramilitares o la fuerza pública: 32.000 desapariciones entre las cuales 8.000 documentadas como detención y desaparición forzada; 10.000 secuestros. Y a pesar de los pactos de 1991 con 5 guerrillas que pasaron a la vida civil y de la desmovilización de grandes estructuras paramilitares entre 2005 y 2007, la violencia armada ha continuado y actúan más de 12.000 guerrilleros, 7.000 naracoparamilitares que son enfrentados por unas fuerzas armadas que son tres veces más grandes que las filipinas - en relación con la población - y cuentan con la asesoría y apoyo estratégico del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos. En los últimos ocho años, no obstante la disminución de la violencia en el país, se registran más de 2 millones de desplazados y 2.500 ejecuciones extrajudiciales en investigación y otros miles confundidas en fosas comunes.

Filipinas no ha escapado a las graves violaciones a los derechos humanos con más de 12.000 homicidios políticos desde la dictadura (1972 - 1986) hasta hoy; esto se observa en los registros de monitoreo entre junio de 2004 y junio de 2010 realizados por la comisión

conjunta: 1.348 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas armadas, 449 ejecuciones por parte de las guerrillas, cobro armado del *impuesto revolucionario*(sic). En el último año han aumentado las acusaciones por el uso de minas antipersona por parte de las guerrillas (2 eventos) o el ejército (28 eventos) y por la formación de grupos campesinos e indígenas antiguerrilla que colaboran como paramilitares legales tipo Convivir. No obstante estas cifras que indican la continuidad de las confrontaciones armadas, si se comparan con las de Colombia su impacto relativo es menor y la presión por la reducción es más fuerte desde que se retomó en 2004 el seguimiento al *pacto de respeto a los derechos humanos y a la ley humanitaria internacional*.(CARHRIHL)

Para un filipino es motivo de asombro la degradación de los conflictos armados en Colombia. Les suena familiar el recuento histórico que muestra como desde la guerra de mediados del siglo XX conocida como La Violencia, las confrontaciones armadas han estado vinculadas a luchas de poder político y a formas de enriquecimiento y de uso de la violencia y del control del Estado para beneficio de negocios legales e ilegales. Pero se hacen muchas preguntas sobre el papel del narcotráfico y la formación de carteles y de ejércitos privados, que es el capítulo más conocido de la historia reciente de la violencia en Colombia, sobre todo entre 1995 y 2007. Los más entendidos preguntan ¿Cómo es eso de la simbiosis de narcotráfico, paramilitarismo y guerra por la apropiación de bienes, territorios y rentas públicas? ¿Qué significa que en las últimas décadas se hayan aliado narcotraficantes y políticos llegando hasta controlar buena parte del país, del Congreso de la República, los organismos de inteligencia del Estado y llegaran a la misma coalición de gobierno? Y no faltan por supuesto los interrogantes sobre la degradación de la guerrilla al escalar en los métodos atroces de control territorial, de poblaciones, de finanzas y hasta la vinculación con redes del narcotráfico.

En Filipinas se observa mayor dispersión de las armas que en Colombia y mayor relación entre jefes políticos y ejércitos privados, mayor impacto político de las acciones guerrilleras, especialmente en la región de Mindanao, pero menor intensidad de las confrontaciones y de las agresiones a la población civil.

Entre tantos temas de reflexión que resultan de la comparación de estas búsquedas de la paz, tal vez lo que puede tener un sentido práctico inmediato es el pacto de respeto a la población civil, suscrito en Filipinas desde 1998. ¿Será posible, oportuno, útil intentar en Colombia algo similar, centrado en el respeto a las normas del derecho internacional humanitario?

Algunos nos aproximamos a la situación de conflictos armados en Filipinas con esa inquietud central y al final llegamos a la conclusión de que en medio de tantas diferencias y complejidades tal vez en esta experiencia humanitaria se encuentren las primeras lecciones por aprender.

### *El pacto de 1998 y 2004*

El Acuerdo de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario suscrito en 1998 entre el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático de Filipinas (que incluye al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo Ejército del Pueblo) es una muestra de las dificultades y posibilidades de la solución política a los conflictos armados en ese país. Después de 12 años de haberse firmado ese acuerdo ha sido imposible pasar a los otros puntos de la agenda pactada que incluyen “1. Las reformas socioeconómicas; 2. Reformas políticas y constitucionales y 3. Fin de las hostilidades y disposición de fuerzas”. Y es ilustrativo de las dificultades el que solo en 2004 se haya logrado reanimar ese pacto con la firma de la Declaración de Oslo que reafirma los compromisos y establece el Comité Conjunto de Monitoreo entre el GRP y el NDFP.

El Pacto de 1998 es muy concreto en lo que se refiere a la observancia incondicional de las normas del DIH y en este terreno muestra lo mayores avances. En los otros temas relativos a los derechos humanos se incluyen puntos que transcriben enunciados de convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos, libertades fundamentales y derechos económicos, sociales, económicos y culturales. Algunas de esas declaraciones de principios o derechos están incorporados a la Constitución Política y otros son de aplicación progresiva y de interpretación según la orientación política de los gobiernos.

La declaración de Oslo desde 2004 ha sido referencia obligada en la difícil relación entre el NDFP y el gobierno. La Comisión Conjunta de Monitoreo, integrada paritariamente, ha recibido quejas y denuncias de incumplimientos en particular a las normas del DIH y en el debate público han continuado hasta hoy las exigencias de gestiones efectivas para que la guerrilla filipina y sus dirigentes sean retirados de las lista de terroristas elaboradas por la Unión Europea y Estados Unidos. Otro asunto álgido ha sido el reclamo de cumplimiento de los acuerdos de reparación a las víctimas de la dictadura de Marcos.

El Pacto de 1998 refrendado en Oslo 2004, evidentemente no ha conducido a un periodo de negociaciones de paz o de diálogos formales sobre la agenda pactada, pero ha operado como un instrumento útil en la protección de la población civil y la deslegitimación de infracciones al DIH y entre ellas de crímenes atroces tipificados en el Estatuto de Roma. En Filipinas se ha logrado que todos los sectores de la sociedad y del Estado y todos los grupos armados se reclamen campeones de los derechos humanos y de las normas humanitarias y esté por fuera de toda discusión el rechazo a prácticas como la toma de rehenes, el secuestro y la desaparición forzada, los homicidios de persona protegida o la ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de niños, el uso de armas de destrucción indiscriminada, el daño a bienes civiles, el desplazamiento o el ataque a la misión médica y a otras entidades o personas neutrales. Semejante proclama o reafirmación de la observancia del DIH no es irrelevante en una situación de conflictos armados prolongados y aunque no han faltado las infracciones, el pacto del 98 ha servido de instrumento de

empoderamiento de la sociedad civil y de reducción del daño en medio de las confrontaciones.

En esta experiencia de pacto humanitario en Filipinas ha sido importante también el lugar asignado por las partes a un tercero facilitador. Los firmantes de la Declaración de Oslo al gobierno noruego como facilitador para apoyar a los paneles negociadores y ofrecer a solicitud de las partes “recomendaciones, opiniones y sugerencias”; además se le compromete a apoyar al Comité Conjunto de Monitoreo y a la implementación del CARHRIHL.

La aplicación del CARHRIHL ha contado con la presencia activa de la sociedad civil de Filipinas organizada en redes para hacer un monitoreo independiente y presionar a las partes al efectivo respeto de los derechos de la población.

Sulong CARHRIHL es el nombre de la alianza de ONGs, iglesias, universidades y organizaciones sociales y comunitarias, que en todas las regiones de Filipinas se ha encargado de fortalecer la capacidad de reacción de la población frente a acciones violentas en medio del conflicto o de las estrategias de guerra. Esta red nacional se ha propuesto divulgar las normas del DIH en todos los sectores, apoyar a las organizaciones defensoras de derechos humanos, hacer ese monitoreo independiente y promover la incidencia entre agentes del Estado y estructuras del NDFP y de las guerrillas para la plena observancia de los compromisos.

En Colombia no se ha llegado muy lejos en acuerdos específicos para la observancia de todas las normas del derecho internacional humanitario y cada vez que el tema ha estado en la agenda pública nos hemos encontrado con discursos generales llenos de salvedades sobre la interpretación o justificación de prácticas como el secuestro, toma de rehenes, el desplazamiento o el asesinato de civiles acusados de combatientes camuflados, infiltrados o cosa por el estilo. Así que acercarse a la experiencia de Filipinas en esta materia puede ser muy útil para la protección de la población civil y el des escalamiento de las confrontaciones armadas.

***Ante procesos bloqueados y congelados las claves de la paz están en el papel central de la sociedad civil***

La otra cara de la recuperación de la experiencia filipina con el pacto humanitario es el reconocimiento de la dificultad de pasar a negociaciones sustantivas o de reformas como paso previo a un acuerdo final de paz. ¿Qué hacer entonces en estas situaciones de largos procesos de conflictos armados, de intentos fallidos de negociaciones y cuando la determinación de los gobiernos y de los insurgentes es escalar la guerra hasta doblegar la voluntad del contrario para imponer las condiciones?

En el primer discurso sobre *el estado de la nación*, pronunciado el pasado 27 de julio, el presidente Benigno Aquino hizo una breve alusión a la política de paz señalando que retomaría las negociaciones con el MILF en Mindanao, pero no dio señales para el trámite de la agenda pactada y congelada desde 1998 con la guerrilla maoísta del NPA. Este informe a la nación que es considerado como la hoja de ruta del nuevo gobierno se centró en los temas de la corrupción, el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y en relación a los conflictos armados solo le dio importancia a las tensiones en la región de predominio de población musulmana en donde las reivindicaciones de autonomía o independencia las recoge la guerrilla mora.

Durante la administración de Gloria Macapagal Arroyo que culminó el pasado 28 de junio, se hicieron intentos de solución en el sur y se avanzó en la definición de los territorios ancestrales logrando un acuerdo que a la postre, en 2008, fue declarado inconstitucional por la corte. No obstante esta dificultad, se ha mantenido un cese al fuego prolongado y las hostilidades se han reducido considerablemente si se las compara con la situación al inicio de la década.

En Mindanao se siente un ambiente extraño desde la mirada de un colombiano. La fuerza pública sabe en donde están los jefes del MILF, sus campamentos y barrios donde viven los milicianos con sus familias. Los visitantes internacionales interesados en la paz pueden llegar hasta esos sitios e incluso son transportados por los militares que los esperan para luego llevarlos de regreso al hotel o a un evento en los cuarteles.

Civiles y militares coinciden en que “Es más fácil el diálogo con la guerrilla mora pero terminar los acuerdos es muy complicado porque se trata de muchos asuntos mezclados comenzando con el problema de la independencia o la autonomía reivindicada por la población musulmana desde hace siglos”. “Los armados del frente moro de liberación son solo siete o cinco mil, pero su influencia no se puede medir por esas cifras, es un problema nacional que tiene una base religiosa y una historia de resistencia desde la colonización y evangelización católica española hasta hoy”. Ese 6% de población musulmana en el total de 93 millones de habitantes, se concentra en Mindanao y allí convive con católicos cuya presencia ha sido fomentada y llegan ya al 63% del total de la población de la isla que es la segunda en importancia en ese archipiélago.

Mientras el nuevo gobierno ha reanimado el panel negociador con el MILF, la línea a seguir con el NPA parece mantenerse en los lineamientos de mano dura sostenidos en los últimos 9 años por el gobierno de Arroyo. Después de la declaratoria de guerra al terrorismo por la administración Bush, en Filipinas como en Colombia, el gobierno promovió que se incluyera a las guerrillas como grupos terroristas en las listas de Estados Unidos y la Unión Europea. La determinación fue arrear la ofensiva militar, poner como condición para cualquier diálogo el cese al fuego y de hostilidades y la determinación de ir a la dejación de las armas; se fomentó la desertión o reintegración de excombatientes y al

final de la administración Arroyo se anunció que la guerrilla maoísta había sido reducida desde 25000 efectivos armados a menos de 4500. La pérdida de incidencia en las redes sociales y políticas, que desde la época de la dictadura han sido la principal fortaleza de esa guerrilla, es demostrada con la crónica de pugnas, divisiones y ajuste de cuentas con centenares de muertos. Pero son más repetidas las cifras de los pobres resultados del NDF, el frente político de la guerrilla que actúa en la legalidad, en las elecciones al nuevo Congreso: no logró ninguna curul en la Cámara donde antes había estado representado y menos en el Senado.

El paso de lo humanitario a la agenda de reformas ha sido postergado y hasta la fecha el NPA se niega a volver a la mesa en condiciones de cese al fuego y reclama como condición ser retirado de las listas de terroristas, el estatus de inmunidad a la delegación de negociadores y la suspensión de operativos militares en las zonas rurales de su influencia.

Dada la situación política con un gobierno que se inicia con el respaldo de más del 60% de la población a su programa anticorrupción y de disminución de la pobreza y con el balance de éxitos militares de la acción antiguerrilla (antiterrorista dicen los militares filipinos), es poco probable que el gobierno se meta en una negociación de reformas, comenzando por la agraria o para una nueva constitución. Benito Aquino, que es una figura de prestigio con un discurso democrático liberal, no tiene condiciones ni interés alguno en alterar la estructura de poder del país donde tradicionalmente han tenido un lugar central los grandes hacendados y hoy la alianza con poderosas multinacionales agroindustriales.

Todos los que hacen análisis comparados comienzan diciendo que no son iguales ni dos gotas de agua y que cada país con su historia de conflictos es peculiar, único e irrepetible. Pero a renglón seguido anotan que no obstante esas salvedades hay factores históricos, globales o regionales que constituyen realidades con semejanzas entre países y esta verdad no deja de venir a la mente cuando comparamos las situaciones de conflicto y bloqueo de posibilidades de negociación o pacto final de cese de hostilidades en Colombia y Filipinas.

Como en Filipinas con el NPA, el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado que su política con las FARC y el ELN es arrear la ofensiva militar para desmantelarlos o colocarlos en derrota definitiva antes de 2014. Por eso endurece las condiciones para un diálogo exigiendo liberación unilateral de todos los secuestrados y fin del terrorismo como paso previo a cualquier diálogo. Y la guerrilla desde su orilla, cuando le exigen someterse a las normas humanitarias y hacer gestos que le den credibilidad a sus intenciones de paz, habla en general de su disposición al diálogo y de su agenda de reformas sustantivas para una futura mesa de negociaciones. Mientras en Filipinas la agenda de negociaciones permanece congelada con el NPA en Colombia no hay agenda a la vista.

En uno y otro país está en crisis el modelo de búsqueda de la paz entendido como solución de los conflictos armados y de los problemas nacionales mediante la negociación entre la

guerrilla *autodefinida como marxista o maoista* y el gobierno. En uno y otro país estas guerrillas se encuentran en retroceso, no son reconocidas como voceras de una parte importante de la población y su proyecto de lucha armada por el poder está desfasado de la realidad política nacional e internacional y está condenado al fracaso. Ni la guerrilla, que aún mantiene reservas y capacidad de hostigar, puede imponer los términos de una negociación para compartir el poder y darle sentido a reformas profundas, ni el poder vigente está dispuesto a someter sus intereses y sus planes de negocios y definiciones del sistema político a una mesa de pactos.

En medio de tanta dificultad para llegar al fin de las hostilidades, en Filipinas se mantiene la solución política de los conflictos con alguna dinámica en el sur y prendida del hilo del pacto humanitario de 1998 en lo que respecta al NPA. Esta circunstancia le permite a un militar decir que “es difícil reanudar las conversaciones con el NPA pero si se logra volver a la mesa de negociación puede ser más fácil llevarlas a término que con el MILF. El pacto del 98 ayuda, los asuntos a resolver están más delimitados pero se necesita un cese al fuego prolongado.”

### ***Conflictos arcaicos***

Al hablar de violencia política y conflictos armados de más de 40 años en Colombia y Filipinas no podemos olvidar los cambios en el régimen político que en un caso han estado asociados al fin de una dictadura de 20 años que impuso la ley marcial, cerró el congreso y suspendió libertades civiles. Y en el otro caso siguieron a la terminación del Frente Nacional y 30 años de Estado de Sitio y a una etapa cruenta de guerra declarada por los grandes carteles del narcotráfico y de ascenso de la insurgencia guerrillera en los años setenta y ochenta. En Filipinas triunfa una revuelta pacífica en contra de la dictadura y se inicia una transición democrática dirigida por las elites más modernizantes y neoliberales. En Colombia se impone un levantamiento ciudadano sin armas en respuesta a la crisis del régimen post frente nacional y al ascenso de la violencia y de los conflictos armados; ese levantamiento lleva a acuerdos de paz de una parte de las guerrillas y a una Asamblea Constituyente que introduce importantes modificaciones y aprueba una nueva constitución como pacto de paz.

Esas transiciones llevan a pactos parciales de paz y a regímenes que significan democratización frente al pasado y al mismo tiempo recomposición de las elites gobernantes con predominio de aquellas más ligadas a la globalización dirigida por las multinacionales y a las grandes potencias.

Las guerrillas que se mantienen hasta hoy en Colombia y Filipinas no han interpretado adecuadamente el sentido de los cambios nacionales y del contexto internacional después del viraje chino al *socialismo de mercado en un solo país* y del colapso de la URSS; con obstinación han mantenido lo fundamental de sus estrategias y programas para justificar la

continuidad de la lucha armada. El aislamiento internacional del proyecto de lucha armada contra democracias neoliberales ha sido mayor después del 11 de septiembre de 2001 y no solo se han cerrado las posibilidades de toma militar del poder pues también han disminuido las posibilidades de negociar el poder para imponer un modelo económico y político antagónico o de transacción. En ese contexto la reivindicación de autonomía en Mindanao es considerada legítima por los más diversos sectores, pero en lo relativo al NPA, sus discursos suenan anacrónicos en el nuevo panorama internacional y de cada país. La pretensión de viejas guerrillas de lograr la toma del poder mediante la guerra o de hacer la resistencia armada a la globalización imperial es vista como una estrategia inviable en el nuevo contexto de poder.

En un país post dictadura y que ha dejado de ser rural para transformarse en industrial, agroindustrial y de servicios ligados a las nuevas tecnologías, es una curiosidad la guerrilla maoísta que transcurre paralela al post maoísmo en China y sigue con sus ideas de la guerra popular prolongada para cercar a las ciudades desde el campo y hacer la revolución democrática.

Y en Colombia después de la Constitución de 1991 y la confrontación por darle contenido al Estado Social de Derecho, es incomprensible para la inmensa mayoría la persistencia de guerrillas que mantienen los programas de reforma de los años sesenta y que ocultan el sentido de sus reivindicaciones al darle prioridad durante más de una década a la pretensión de reconocimiento como beligerantes utilizando para ello métodos antihumanitarios (minas, desplazamiento, secuestro, etc) y la demanda de canje de rehenes o prisioneros de guerra.

## LAS VIAS CIUDADANAS HACIA LA PAZ

El recuento de estos procesos bloqueados o congelados nos lleva a resaltar el protagonismo de la sociedad civil no solo en las dimensiones humanitarias de protección de la población, reducción del daño o garantía de derechos de las víctimas. En los dos países los hitos más importantes de resistencia o transformación democrática han estado determinados por la acción no violenta de la sociedad civil.

Como se ha señalado atrás, en Filipinas han experimentado dos revolcones pacíficos del sistema político bajo el lema del *poder popular*; una con el levantamiento en contra de la dictadura y la ley marcial y la otra en contra de un gobierno corrupto y autoritario que estaba llevando el país al colapso. En la historia reciente de Colombia las grandes transformaciones de signo democrático han estado sustentadas por la movilización de millones de ciudadanos declarados en desobediencia civil contra la violencia y el poder arbitrario: después del levantamiento democrático por la Constituyente, se presenció la movilización de multitudes contra la guerra y por la paz. Han sido estos movimientos

sociales y políticos los que han permitido espacios de resistencia y la construcción de instrumentos para avanzar en un camino de democracia y equidad.

Esta puede ser la lección mayor de una mirada a la historia de guerras y búsqueda en Colombia y Filipinas: en estos procesos de violencia crónica y conflictos armados prolongados y cada vez más extraños a la población, comenzando por los más pobres que más los padecen, la suerte de la paz depende de la sociedad civil y de su acción por la construcción de paz y democracia. En otras palabras, la paz ha dejado de ser un asunto de negociación entre los que hacen la guerra y los pactos de democracia y de reformas estructurales dependen más de la realidad de las fuerzas políticas y sociales en la civilidad que de la correlación de fuerzas en los escenarios de guerra.